

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO No. _____

Santiago de Cali, diecinueve (19) de mayo de dos mil veinte (2020).

MAGISTRADO PONENTE: OMAR EDGAR BORJA SOTO

MEDIO DE CONTROL:	Control Inmediato de legalidad del Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020 y Decreto No. 4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020, proferidos por el MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI.
EXPEDIENTE:	76001-23-33-000-2020-00298-00 (original) 76001-23-33-000-2020-00554-00 (Acumulado)
ASUNTO:	Resuelve sobre la acumulación de procesos Avoca conocimiento.

AUTO RESUELVE SOBRE LA ACUMULACIÓN DE PROCESOS Y AVOCA CONOCIMIENTO

Procede el Despacho a proveer sobre la aceptación o no de la acumulación del proceso que cursa en este Despacho Judicial adelantado bajo radicado No. 76001-23-33-000-2020-00298-00 con el radicado bajo el número No. 76001-23-33-000-2020-00554-00 que cursa en el Despacho del Magistrado **JHON ERICK CHAVES BRAVO** y, una vez resuelto, procederá a analizar si hay lugar a avocar el conocimiento del Decreto No. 4112.010.20.00**767** del 2 de abril 2020 proferido por el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA.**

I. ANTECEDENTES

Mediante providencia del 30 de marzo de 2020, este Despacho Judicial avocó el conocimiento del medio de control inmediato de legalidad **Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020** *“por medio del cual se implementan las instrucciones impartidas en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19 y el mantenimiento del orden público, contenidas en el decreto nacional 457 del 22 de marzo de 2020, emitidas por el presidente de la república y se dictan otras disposiciones”*, proferido por el **Municipio de Santiago de Cali – Valle del Cauca.**

Por otra parte, mediante providencia del 6 de mayo de 2020 proferida por el Magistrado **JHON ERICK CHAVES BRAVO**, se remitió el proceso radicado bajo partida No. 76001-23-33-000-2020-00554-00, en el que se estudia el control inmediato de legalidad del Decreto No. 4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020 proferido por el **MUNICIPIO DE**



SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA, para que se resolviera sobre la acumulación de procesos, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

“Por petición ciudadana se remitió vía electrónica el Decreto No. 4112.010.20.00767 de 2020 “Por el cual se imparten ordenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante el decreto nacional 457 del 22 de marzo de 2020 y el decreto distrital no. 4112.010.20.0742 de marzo 24 de 2020 y se dictan otras disposiciones”, con el fin que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca asumiera el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, correspondiéndole por reparto el asunto a este Despacho.

Se observa que en el presente Decreto se están complementando órdenes necesarias para la ejecución de la medida de aislamiento ordenada en el Decreto No. 4112.010.20.0742 de marzo 24 de 2020 proferido por el Municipio de Cali- Valle, encontrándose esta última decisión, sometida al control de legalidad a cargo del Despacho del doctor Omar Edgar Borja Soto con el radicado 2020- 00298-00.

(...)

... el Despacho no asumirá el conocimiento del control inmediato de legalidad sobre el Decreto No. 4112.010.20.00767 de 2020 ya que en este se imparten órdenes para la ejecución de la medida de aislamiento adoptada en el Decreto No. 4112.010.20.0742 de marzo 24 de 2020 proferido por el Municipio de Cali- Valle, razón por la cual, se dispondrá a remitirlo al Despacho del Dr. Omar Edgar Borja Soto, en razón a que el mismo se encuentra conociendo del control inmediato de legalidad del Decreto en mención, como quiera que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, el Decreto en cuestión debe ser conocido por el Despacho que conoció el inicial.”

CONSIDERACIONES:

Para resolver el asunto planteado, se debe establecer si **i)** si existe unidad de materia y si se dan los presupuestos para aplicar los principios de integridad normativa y control integral; **ii)** si en este medio de control inmediato de legalidad es procedente la acumulación de pretensiones, de procesos o de demandas de conformidad con la normativa contenciosa administrativa, para finalmente **iii)** resolver sobre la solicitud de acumulación formulada por el homologo Despacho y decidir si hay lugar a avocar el conocimiento del Decreto

i) UNIDAD DE MATERIA - PRINCIPIOS DE INTEGRIDAD NORMATIVA Y CONTROL INTEGRAL.

Para determinar si existe unidad de materia, se procederá a hacer alusión a los actos administrativos objeto de control inmediato de legalidad, en los siguientes términos:

Mediante el Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020 proferido por el Alcalde de **SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA**, adoptó entre otras medidas, las



siguientes:

*“(…) **ARTÍCULO PRIMERO:** Implementar las instrucciones contenidas en el Decreto Nacional No. 457 de marzo 22 de 2020, “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público”, ordenando el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali a partir de las cero horas (00:00 a.m) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m) del día 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid – 19”*

Por su parte, en el Decreto No. 4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020 proferido por el mismo ente municipal, se indicó lo siguiente:

*“Artículo Octavo: Las disposiciones contenidas en el presente decreto **forman parte integral de las ordenes e instrucciones impartidas en el Decreto Distrital No. 4112.010.20.0742 de Marzo 24 de 2020.**”*

De estar forma, sin necesidad de realizar mayores elucubraciones, el Despacho puede evidenciar que la resolución posterior se encuentra estrechamente ligada, en cuanto a la materia objeto de control, con la Resolución primigenio siendo, por lo que a prima facie se encuentra acreditado el mencionado **presupuesto de unidad normativa**, situación que además se encuentra prevista en el párrafo del art. 135 del CPACA, el cual resulta aplicable por analogía a este medio de control constitucional, veamos:

***PARÁGRAFO.** El Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, **podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional.** Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman **unidad normativa** con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales.*

La acumulación de procesos tiene como propósito hacer eficaz el **principio de la economía procesal**, de esta manera se logra evitar que se produzcan fallos contradictorios sobre cuestiones conexas o sobre un mismo litigio.

En la sentencia **Sentencia C-568/16**, se reiteraron los presupuestos para adelantar una **integración normativa**, señalando expresamente que este principio tiene como objetivo (i) la supremacía de la Constitución; (ii) la efectividad del control abstracto de constitucionalidad; (iii) la seguridad jurídica y (iv) coherencia del ordenamiento jurídico, entre otros; indicando además lo siguiente:

11. En la sentencia C-500 de 2014¹ se recopilaron los supuestos en los cuales procede la implementación de la mencionada figura, así:

¹ MP. Mauricio González Cuervo.



“En primer lugar, es posible apelar a la unidad normativa (i) cuando el artículo que se impugna carece “(...) de un contenido deóntico claro unívoco o de un ámbito regulador propio, aislado del contexto en el cual están insertadas, y se requiere precisar su alcance incluyendo en el juicio de constitucionalidad otros enunciados normativos”<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-516-15.htm> - ftn4. **En segundo lugar**, es procedente (ii) cuando la disposición demandada o la norma que de ella se desprende, está mencionada o referida en otros artículos del ordenamiento jurídico de manera que para asegurar la efectividad de la decisión que se tome, es necesario también examinarlos. Ha explicado la Corte que en este caso las normas tienen “un sentido regulador propio y autónomo (...) pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen (...) de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas”. En tercer lugar, resulta posible acudir a ella (iii) cuando **la norma que se juzga tiene una relación íntima o intrínseca con otra** que, prima facie, plantea serias dudas de constitucionalidad.

Un examen de cada una de tales hipótesis permite identificar su justificación constitucional. **El primer supuesto**, tiene como propósito delimitar la materia objeto de juzgamiento de manera que este Tribunal pueda adoptar una decisión de mérito. **La segunda** tiene como finalidad asegurar plenamente la supremacía de la Constitución y la certidumbre respecto de las normas vigentes evitando, de una parte, que luego de declarar la inexecutable de una norma ella subsista en el ordenamiento o, de otra parte, que con posterioridad a la declaratoria de executable, contenidos normativos idénticos –vigentes al momento del pronunciamiento- sean objeto de demandas iguales. **La tercera** propicia también la supremacía de la Constitución al evitar que disposiciones directamente vinculadas con aquellas que fueron demandadas y respecto de las cuales es posible sospechar de su inconstitucionalidad, permanezcan en el ordenamiento sin ser juzgadas”.

12. En el caso concreto, la Corte considera que **debe realizar una integración normativa con la expresión** “Pero la viuda que contraiga matrimonio recibirá, en sustitución de las pensiones eventuales, una suma global equivalente a tres (3) anualidades de la pensión reconocida” contenida en la parte final del mismo artículo 62 de la Ley 90 de 1946 al cumplirse con el requisito de (i) estar inserta en la misma norma demandada y (ii) ser necesario un pronunciamiento sobre este otro enunciado normativo.

De esta forma, tal como se indicó anteriormente, y con el ánimo de cumplir con los objetivos previstos anteriormente y habida cuenta que el acto primigenio **tiene una relación íntima o intrínseca** con la resolución sub-siguiente, además que este último expresamente refiere y se remite al primero. En conclusión, se cumplen con todos los presupuestos.

Así mismo, la Corte Constitucional ha señalado sobre la **integración de la unidad normativa**, que opera “... cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano. En este último caso, es procedente que la sentencia integre la proposición normativa y se extienda a aquellos otros aspectos normativos que sean de forzoso análisis para que la Corporación pueda decidir de fondo el problema planteado”².

² Corte Constitucional, sentencia C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero).



(ii) SOBRE LAS FIGURAS JURÍDICAS DE LA ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES, DE PROCESOS Y DE DEMANDAS.

Lo primero que se debe señalar es que La Ley 1437 de 2011 hace referencia únicamente a la figura de la acumulación **de pretensiones en una misma demanda**. Los artículos 157, 162 (numeral 2º), 165 ídem, expresan lo siguiente:

Ley 1437 de 2011

Título V. Demanda y proceso contencioso administrativo

Artículo 157. Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor **en la demanda**, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.

Para los efectos aquí contemplados, **cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones**, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.
2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, **con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones**.

Artículo 165. Acumulación de pretensiones. En la demanda se podrán acumular pretensiones de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa, siempre que sean conexas y concurren los siguientes requisitos:

1. Que el juez sea competente para conocer de todas. No obstante, cuando se acumulen pretensiones de nulidad con cualesquiera otras, será competente para conocer de ellas el juez de la nulidad. Cuando en la demanda se afirme que el daño ha sido causado por la acción u omisión de un agente estatal y de un particular, podrán acumularse tales pretensiones y la Jurisdicción Contencioso Administrativa será competente para su conocimiento y resolución.
2. Que las pretensiones no se excluyan entre sí, salvo que se propongan como principales y subsidiarias.
3. Que no haya operado la caducidad respecto de alguna de ellas.
4. Que todas deban tramitarse por el mismo procedimiento.

Título VIII Disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral.

Artículo 281. Improcedencia de acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas. En una misma demanda no pueden acumularse causales de nulidad relativas a vicios en las calidades, requisitos e inhabilidades del elegido o nombrado, con las que se funden en irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio.

La indebida acumulación dará lugar a la inadmisión de la demanda para que se presenten de manera separada, sin que se afecte la caducidad del medio de control.



De las referidas disposiciones se desprende que para la acumulación de pretensiones: 1) deben aplicarse las reglas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437, artículo 162, numeral 2º)³, no obstante a lo anterior el medio de **control inmediato de legalidad no es una demanda** propiamente dicha, por cuanto **no existen pretensiones** por resolver, además que este mecanismo solo fue previsto para el trámite de nulidad, de nulidad y de restablecimiento del derecho, relativas a contratos y de reparación directa y dejó por fuera el trámite especial de control inmediato de legalidad.

Con fundamento en lo anterior, resulta aplicable lo señalado en el artículo 306 ídem que consagró una cláusula de remisión al Código de Procedimiento civil –*hoy Código General del Proceso*- en los siguientes términos:

Artículo 306. Aspectos no regulados. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

El Código General del Proceso, en el artículo 148 numeral 1º señala lo siguiente:

Artículo 148. Procedencia de la acumulación en los procesos declarativos. Para la acumulación de procesos y demandas se aplicarán las siguientes reglas:

1. Acumulación de procesos. De oficio o a petición de parte podrán acumularse dos (2) o más procesos que se encuentren en la misma instancia, aunque no se haya notificado el auto admisorio de la demanda, siempre que deban tramitarse por el mismo procedimiento, en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Cuando las pretensiones formuladas habrían podido acumularse en la misma demanda.
- b) Cuando se trate de pretensiones conexas y las partes sean demandantes y demandados recíprocos.
- c) Cuando el demandado sea el mismo y las excepciones de mérito propuestas se fundamenten en los mismos hechos.

2. Acumulación de demandas. Aun antes de haber sido notificado el auto admisorio de la demanda, podrán formularse nuevas demandas declarativas en los mismos eventos en que hubiese sido procedente la acumulación de pretensiones.

3. Disposiciones comunes. Las acumulaciones en los procesos declarativos procederán hasta antes de señalarse fecha y hora para la audiencia inicial.

Si en alguno de los procesos ya se hubiere notificado al demandado el auto admisorio de la demanda, al decretarse la acumulación de procesos se dispondrá la notificación por estado del auto admisorio que estuviere pendiente de notificación.

De la misma manera se notificará el auto admisorio de la nueva demanda acumulada, cuando el demandado ya esté notificado en el proceso donde se presenta la acumulación.

En estos casos el demandado podrá solicitar en la secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes, vencidos los cuales comenzará a correr el término de ejecutoria y el de traslado de la demanda que estaba pendiente de notificación al momento de la acumulación.

³ Esto es un cambio sustancial del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que en el artículo 145 del Código Contencioso Administrativo se establecía que la acumulación de pretensiones procedería en la forma establecida en el Código de Procedimiento Civil.



Cuando un demandado no se hubiere notificado personalmente en ninguno de los procesos, se aplicarán las reglas generales.

La acumulación de demandas y de procesos ejecutivos se regirá por lo dispuesto en los artículos 463 y 464 de este código.

La norma anterior hace referencia a la figura de la acumulación en cuanto a procesos y en cuanto a demandas, ambos de naturaleza declarativa.

En cuanto a la acumulación de procesos, se puede señalar que ésta procede, al haberse cumplido los siguientes requisitos:

- i) **de oficio** o a petición de parte,
- ii) **para procesos** que se encuentren en la **misma instancia** – única instancia-,
- iii) **para procesos** que se tramiten por el **mismo procedimiento**,

los demás requisitos no aplican por cuanto en este asunto no es una demanda propiamente dicha, por las razones expuestas.

De acuerdo con los numerales 1° y 3° del artículo 148 del Código General del Proceso, antes transcritos, la acumulación de procesos exige como presupuesto la existencia de varios procesos y en consecuencia que en estos ya se haya trabado al litis mediante la expedición del auto admisorio de la demanda.

Lo anterior permite al Despacho concluir que **es procedente** en el presente caso aplicar la figura jurídica de la **acumulación de procesos**, dado que las circunstancias jurídico procesales lo permiten.

iii) **SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL NUEVO DECRETO.**

Habiendo dejado por sentado la procedencia de acumulación de procesos, procederá el Despacho a analizar si se dan los presupuestos para avocar el conocimiento del Decreto No. 4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020 proferido por el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA**, el cual fue remitido sin haberse admitido.

De lo general.

El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud - OMS-, calificó el brote de COVID-19 (Coronavirus) como una pandemia; por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante Resolución 385 de 12 de marzo de 2020, declaró



«emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020».

Posteriormente, el señor Presidente de la República, por medio del Decreto Declarativo 417 de 17 de marzo de 2020, declaró o estableció el *«Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días»*; con el fin de adoptar todas las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19.

Por petición ciudadana vía correo electrónico se remitió para el trámite de **control inmediato de legalidad** consagrado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), el Decreto No. 4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020 *“Por el cual se imparten ordenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante el decreto nacional 457 del 22 de marzo de 2020 y el decreto distrital no. 4112.010.20.0742 de marzo 24 de 2020 y se dictan otras disposiciones”*.

Se precisa, además, que según lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, *«Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, [como lo es el estado de emergencia], tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento»*.

De esta forma, el mencionado Decreto es objeto de control, al haber sido expedido por un **establecimiento público del orden municipal**, descentralizado con autonomía administrativa, financiera, patrimonio propio y personería jurídica.

Así mismo, comoquiera que el Consejo Superior de la Judicatura mediante ACUERDO PCSJA20-11518 16 de marzo de 2020 *“Por el cual se complementan las medidas transitorias de salubridad pública adoptadas mediante el Acuerdo 11517 de 2020”* dispuso, entre otros, que los funcionarios y empleados judiciales trabajen desde sus casas, se hace necesario adelantar todas las actuaciones que se deriven de esta



providencia a través de los medios electrónicos, como lo contempla el art. 186 del CPACA, que estipula:

“ARTÍCULO 186. ACTUACIONES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. *Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.*

PARÁGRAFO. *La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Código, sea implementado con todas las condiciones técnicas necesarias **el expediente judicial electrónico**, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso.”*

Para lo cual, es necesario disponer las formas cómo se garantizará la publicidad en el presente trámite y en virtud de ello, se ordena a las partes interesadas, Ministerio Público y terceros que toda comunicación sea dirigida a través de los medios electrónicos destinados para este Tribunal a través de los siguientes correos electrónicos:

- A) Correo de la Secretaria Tribunal Administrativo - Valle Del Cauca - Seccional Cali:
s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co
- B) Correo del Despacho: oborjas@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. Competencia: Esta Corporación tiene competencia para conocer del escrito de control inmediato de legalidad, de conformidad con el art. 151 del CPACA, que señala:

“ARTÍCULO 151. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN ÚNICA INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán de los siguientes procesos privativamente y en **única** instancia:

14. **Del control inmediato de legalidad** de los actos de carácter general que sean proferidos en ejercicio de la función administrativa durante los Estados de Excepción y como desarrollo de los decretos legislativos que fueren dictados **por autoridades territoriales departamentales y municipales**, cuya competencia corresponderá al tribunal del lugar donde se expidan.”

Así mismo, el art. 20 de la Ley 137 de 1994 señala:

“ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, **ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales** o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. (...)”



3.- Requisitos formales: De conformidad con el art. 185 del CPACA, tan solo se debe aportar copia del texto de los actos administrativos a los que se refiere el control inmediato de legalidad de que trata el artículo 136 ibidem, el cual fue allegado por correo electrónico en el escrito respectivo, por lo que se concluye que la solicitud debe avocarse.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

RESUELVE:

PRIMERO: DECRETAR la acumulación procesal del expediente con radicado No. 76001-23-33-000-2020-00554-00, donde se realiza el control inmediato de legalidad del Decreto No. 4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020, al expediente con el No. 76001-23-33-000-2020-00298-00 (**original**), en el que se tramita el control inmediato de legalidad del Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020 proferido por el **MUNICIPIO DE SANITAGO DE CALI**, para que sean decididos conjuntamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Así mismo, se suspenderá el trámite del proceso adelantado bajo radicado No. 2020-00298-00 en el cual se estudia la legalidad del Decreto No. 4112.010.20.0742 del 24 de marzo de 2020 hasta tanto el proceso acumulado 2020-00554 se encuentre en la misma etapa procesal del primero mencionado.

SEGUNDO: AVOCAR en **única instancia**, el conocimiento de control inmediato de legalidad de Decreto N°4112.010.20.00767 del 2 de abril 2020, proferido por el **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA** “*Por el cual se imparten ordenes e instrucciones necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento obligatorio ordenada mediante el decreto nacional 457 del 22 de marzo de 2020 y el decreto distrital no. 4112.010.20.0742 de marzo 24 de 2020 y se dictan otras disposiciones*”.

TERCERO: NOTIFICAR inmediatamente **a través del correo electrónico** o a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría, *adjuntando la respectiva copia del decreto en cuestión*, la iniciación del presente asunto al Alcalde Municipal de Santiago de Cali – Valle del Cauca, a la Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca y al Ministerio del Interior para que, si a bien lo tienen, se pronuncien al respecto.



CUARTO: NOTIFICAR personalmente a través del correo electrónico o a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría, al señor Agente del Ministerio Público, *FRANKLIN MORENO MILLÁN*, adjuntando copia del decreto objeto de control.

QUINTO: FIJAR: i) en la sección “novedades” del sitio web de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co), ii) en la sección “aviso a la comunidad” de la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de la página web de la rama judicial y iii) a través de los diferentes medios virtuales que en estos momentos estén a disposición de la Secretaría del Tribunal conforme con lo establecido en los artículos 185 y 186 del CPACA; un aviso por el **término de diez (10) días**, durante los cuales **cualquier ciudadano podrá intervenir** defendiendo o impugnando la legalidad del acto objeto de control (Numeral. 2 del art. 185 del CPACA), adjuntando en el respectivo aviso copia del decreto objeto de control. Los escritos de la ciudadanía se recibirán **a través de los correos electrónicos indicados en esta providencia.**

SEXTO: ORDENAR al Alcalde del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA** o a quien él delegue para tales efectos, que a través de la página web oficial de esa entidad, se publique este proveído a fin de que todos los interesados tengan conocimiento de la iniciación de la presente causa judicial. La Secretaría del Tribunal requerirá al referido ente territorial para que presente un informe sobre el cumplimiento de esta orden.

SÉPTIMO: ORDENAR al Alcalde del **MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA** o a su delegado que en el término de diez (10) días aporte todas las pruebas que tengan en su poder y pretenda hacer valer en el proceso. Igualmente, está en la obligación legal de suministrar los antecedentes administrativos del referido decreto, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del art. 175 del CPACA, so pena de las sanciones establecidas en inciso final del mismo párrafo.

OCTAVO: PRESCINDIR de la invitación a entidades públicas, organizaciones privadas y/o a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso, de que trata el numeral 3 del artículo 185 del CPACA.

NOVENO: Expirado el término de fijación en lista y el término probatorio, pasará el asunto al Ministerio Público delegado para este Despacho Judicial, doctor *FRANKLIN MORENO MILLÁN*, para que dentro de los diez (10) días siguientes rinda el concepto de rigor (Núm. 5 del art. 185 del CPACA).



DÉCIMO: Decretar la práctica de las siguientes **PRUEBAS** por el término de cinco (5) días, para lo cual la Secretaría del Tribunal libraré por medio electrónico la comunicación respectiva al Ministerio del Interior para que certifique si las medidas tomadas en el decreto objeto de control, fueron previamente coordinadas y comunicadas en virtud del párrafo 1⁴ del art. 2 y el art. 3 del Decreto 418 del 18 de marzo de 2020 *“Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público.”*

UNDÉCIMO: Reiterar que, las comunicaciones y respuestas con ocasión de este trámite se recibirán en las siguientes cuentas de correo electrónico:

s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co

s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co

oborjas@cendoj.ramajudicial.gov.co

DUODÉCIMO: Por secretaría de esta corporación, procédase a realizar los trámites pertinentes para el cumplimiento de las órdenes impartidas en esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



OMAR EDGAR BORJA SOTO

⁴ Parágrafo 1: Las disposiciones que para el manejo del orden público expidan las autoridades departamentales, distritales y municipales, deberán ser previamente coordinadas y estar en concordancia con las instrucciones dadas por el presidente de la República